

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°190

Medellín, veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el recurso de apelación interpuesto en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por la señora **MARÍA OTILIA CASTRO ZAPATA** contra **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se condene a **Colpensiones** a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte de su cónyuge el señor **Daniel Cardona Castro** y la indexación de las condenas.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones manifestó, que, contrajo matrimonio con el señor **Daniel Cardona Castro** el día 25 de diciembre de 1976, vínculo del que nacieron 4 hijo a la fecha mayores de edad y que se mantuvo hasta el **11 de abril de 2016**, fecha en que falleció su cónyuge.

El causante se encontraba era cotizante inactivo de **Colpensiones** y para la fecha del deceso contaba con 781 semanas cotizadas, de las cuales 747,17 fueron aportadas antes del 1 de abril de 1994, siendo su última cotización en el año de 2005, anualidad luego de la cual no le fue posible una vinculación laboral formal en la que se le afiliara al sistema de pensiones.

La demandante es una persona de 63 años de edad, sin ingresos económicos, encuestada en el SISBEN III con un puntaje de 30,63.

El día 3 de mayo de 2019, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes, prestación que fue resuelta de forma negativa por **Colpensiones** mediante la **Resolución SUB 172913 del 03 de julio de 2019**, bajo 3 argumentos fundamentales: (i) el causante no reunió el requisito de cotización establecido en la Ley 797 de 2003, (ii) no le es aplicable el principio de la condición más beneficiosa y (iii) el causante en vida reclamó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez.

Contestación Colpensiones

La AFP demandada a través de apoderada indicó que es cierto que: la demandante y el causante contrajeron matrimonio, que el señor **Daniel Cardona Castro** falleció el **11 de abril de 2016**, que la actora reclamó el derecho pensional y este le fue negado por no cumplirse con los requisitos para su causación, finalmente en lo referente a los demás hechos afirmó que no le constan.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia del reconocimiento y pago de la pensión de sobreviviente en aplicación de la condición más beneficiosa, improcedencia de los intereses moratorios, improcedencia de la indexación, compensación, prescripción, buena fe e imposibilidad de condena en costas.

Sentencia de primera instancia

El Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia del **18 de abril de 2022**, **absolvió a Colpensiones** de las pretensiones presentadas en su contra por considerar que no es aplicable en este caso el principio de la condición más beneficiosa, toda vez que no se cumplen las reglas jurisprudenciales delimitadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia para su procedencia, en particular en la sentencia SL-1884-2020.

Esta decisión no la compartió el apoderado de la demandante, motivo por el cual la impugnó, en los siguientes términos:

Recurso de apelación demandante

El recurrente solicita que se **revoque** la decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a las suplicas de la demanda dando aplicación a la condición más beneficiosa en los términos establecidos en la sentencia SU-005 de 2018, lo anterior teniendo en cuenta que esta decisión desarrolla la constitución y tiene como finalidad la protección de personas en condiciones especiales de vulnerabilidad, desarrollo jurisprudencial que resulta más favorable a los intereses de la actora y a la protección de sus derechos fundamentales.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, no se presentaron alegaciones.

CONSIDERACIONES

Problema Jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta instancia de conformidad con el recurso interpuesto, serán: (i) Establecer la fuerza vinculante de las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional y (ii) Determinar si la señora **María Otilia Castro Zapata** cumple con las condiciones de procedencia para aplicar el salto normativo entre la Ley 797 de 2003 y el Decreto 758 de 1990 en virtud de lo dispuesto en la sentencia SU-005 de 2018.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas obrantes en el expediente:

1. La señora **María Otilia Castro Zapata** y el señor **Daniel Cardona Castro** contrajeron matrimonio católico el día **25 de diciembre de 1976** (03/pág.22).
2. El señor **Cardona Castro** cotizó a **Colpensiones** un total de 781 semanas en toda su vida laboral, de las cuales 711,3 semanas fueron aportadas antes del 1 de abril de 1994 (03/págs.29-33).

3. El afiliado falleció el **11 de abril de 2016** (03/pág.17), en vigencia de la Ley 797 de 2003.
4. El día **3 de mayo de 2019**, la señora **Castro Zapata** solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes generada con ocasión de la muerte del causante (03/pág.25).
5. **Colpensiones** a través de la **Resolución SUB 172913 del 03 de julio de 2019**, negó el reconocimiento de la pensión solicitada bajo 3 argumentos fundamentales: (i) el causante no reunió el requisito de cotización establecido en la Ley 797 de 2003, (ii) no le es aplicable el principio de la condición más beneficiosa y (iii) el causante en vida reclamó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez (03/págs.35-39).

Efectuadas las anteriores anotaciones, la Sala procederá a resolver el problema jurídico puesto en su conocimiento:

De la fuerza vinculante de las sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional

En el presente caso se trae a la segunda instancia la discusión acerca de la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial, y más en concreto, las decisiones de las altas cortes como fuente formal y principal del derecho. En lo referente al concepto de precedente jurisprudencial, su definición se encuentra en la sentencia T-017-2022, en la que haciendo cita de la SU-053 de 2015, se expresa en las siguientes palabras:

(...) la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo (...)

En la misma providencia se hace mención a que estas sentencias pueden generar un precedente horizontal o vertical, clasificación que obedece al nivel funcional que tiene el juez o jueces que la profieren, en ese sentido es horizontal la sentencia o grupo de sentencia dictado por un juez o por jueces de igual nivel para los casos similares y vertical la dictada por organismos judiciales superiores que como órgano de cierre tienen una función unificadora de la jurisprudencia.

La fuerza vinculante de esos precedentes busca desarrollar dos principios propios de nuestro ordenamiento jurídico, como lo son la garantía de la igualdad y la seguridad jurídica, conforme con las cuales las situaciones que guardan similitudes fácticas y jurídicas deben tener una misma regla de decisión.

Siendo entonces claro en lo esencial cual es el concepto de precedente, sus clasificaciones y su justificación, es necesario determinar que sentencias en Colombia tienen un efecto vinculante superior y este aspecto es explicado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-149-2021, en la que con ocasión de un cambio en la interpretación de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes de los afiliados por parte de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, se expresó lo siguiente:

31. La jurisprudencia constitucional precisa cuáles son los precedentes de la Corte Constitucional que deben ser atendidos por las autoridades judiciales y cuyo desconocimiento da lugar a la configuración de este defecto.

En primer lugar, las sentencias de constitucionalidad. En estos términos, existe desconocimiento del precedente y, de manera particular, de la cosa juzgada constitucional, cuando las autoridades judiciales no acatan la jurisprudencia que la Corte profiere en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad. Esto puede ser consecuencia de: (i) la aplicación de disposiciones de orden legal declaradas inexecutable, (ii) la aplicación de disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución y son condicionadas, y (iii) la resolución de casos concretos, en contravía de la ratio decidendi de las sentencias de constitucionalidad que expide la Corte.

32. En segundo lugar, las sentencias en las que la Corte Constitucional, bien sea a través de sus Salas de Revisión (sentencias T) o la Sala Plena (sentencia SU), fija el alcance de los derechos fundamentales. El desconocimiento de estas decisiones tiene dos modalidades. Primero, el desconocimiento del precedente constitucional en sentido estricto, que implica apartarse de una sentencia anterior que, por guardar identidad fáctica y jurídica con el caso actual, debía considerarse en atención a la regla de decisión que contenía. Segundo, el desconocimiento de la jurisprudencia constitucional, esto es, de aquellas ‘pautas plausibles de orientación a los tribunales y jueces de niveles subalternos’, que se

dilucidan de la pluralidad de decisiones consistentes y anteriores, relativas a un tema en particular, que no necesariamente debe guardar identidad fáctica con el caso objeto de decisión.

Con todo, hay que recordar que la fuerza vinculante del precedente no es absoluta, y el juez o jueces pueden apartarse de la misma en virtud del principio de la autonomía judicial, sin embargo, el ejercicio de este prerrogativa exige al juez o jueces disidentes, la carga de transparencia consistente en hacer alusión al precedente que sería aplicable y la de argumentación, consistente en exponer su motivación para apartarse del precedente con una carga argumentativa suficiente.

En ese sentido, para ofrecer una conclusión, encuentra la Sala que aquellas decisiones proferidas por la Corte Constitucional tienen el carácter de prevalentes por sobre las dictadas por otras Altas Cortes, aspecto bien explicado en la sentencia T-109-2019, oportunidad en la que la Corte al estudiar la diferencia existente en cuando a la interpretación que de los conceptos que integran el régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, existente entre ese Tribunal y el Consejo de Estado, señaló de forma perentoria lo siguiente:

En este orden de ideas, el **carácter prevalente del precedente constitucional** se fundamenta en los principios de supremacía constitucional y de seguridad jurídica. Por ende, cuando existe contradicción entre el precedente de un órgano de unificación de otra jurisdicción y el precedente constitucional, prevalece este último.

Teniendo en cuenta, las breves consideraciones que anteceden, encuentra esta Sala que no existe discusión en lo referente a la fuerza vinculante que tiene el precedente judicial y la prevalencia que dentro del ordenamiento jurídico tiene el fijado por la Corte Constitucional, por lo que en este sentido la Sala acoge su carácter de fuente principal y prevalente del derecho.

De la aplicación del precedente consagrado en la sentencia SU-005-2018

En el presente caso la Sala evidencia la existencia de dos líneas jurisprudencias la contenida en la sentencia SU-005-2018, que reconoce en la existencia de un derecho viviente ampliamente difundido, reiterado y sustentado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que, en lo fundamental señala que no es posible para la aplicación de la condición más beneficiosa, acoger cualquier

norma legal que haya regulado el asunto en algún momento pretérito en que se ha desarrollado la vinculación de la persona con el sistema de la seguridad social, sino la norma inmediatamente anterior a la vigente que ordinariamente regularía el caso, lo que se traduce en la prohibición al juez de realizar un estudio histórico, con el fin de encontrar alguna norma aplicable al caso, más allá de la inmediatamente derogada.

En la sentencia de unificación de forma particular se reconoce la fuerza vinculante que tiene el precedente la Sala Laboral de la Corte, sin embargo, destaca que el mismo de aplicarse a personas en condición de vulnerabilidad sería lesivo y contrario a la Constitución, por lo que por vía excepcional y cuando quiera que se supere un test, se podrá recurrir a una búsqueda normativa histórica para determinar el cumplimiento de los requisitos para dejar causada la pensión de sobrevivientes.

Este test, contiene las siguientes cinco condiciones cada una necesaria y en conjunto suficientes, para que a la persona que solicita la aplicación de la condición más beneficiosa, se le permita de forma excepcional acudir a la demostración del cumplimiento de los mismos en una norma históricamente aplicable mientras estuvo vigente la afiliación, estas son:

Test de Procedencia	
Primera condición	Debe establecerse que el accionante pertenece a un grupo de especial protección constitucional o se encuentra en uno o varios supuestos de riesgo tales como analfabetismo, vejez, enfermedad, pobreza extrema, cabeza de familia o desplazamiento.
Segunda condición	Debe establecerse que la carencia del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes que solicita el accionante afecta directamente la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es, su mínimo vital y, en consecuencia, una vida en condiciones dignas.
Tercera condición	Debe establecerse que el accionante dependía económicamente del causante antes del fallecimiento de este, de tal manera que la pensión de sobreviviente sustituye el ingreso que aportaba el causante al tutelante-beneficiario.
Cuarta condición	Debe establecerse que el causante se encontraba en circunstancias en las cuales no le fue posible cotizar las semanas previstas en el Sistema General de Pensiones para adquirir la pensión de sobrevivientes.

Quinta condición	Debe establecerse que el accionante tuvo una actuación diligente en adelantar las solicitudes administrativas o judiciales para solicitar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
------------------	--

Se destaca de estas condiciones, que existen cuatro de ellas que recaen en el solicitante de la pensión de sobrevivientes, consistentes, en demostrar la pertenencia a un grupo de especial protección constitucional, la afectación que en sus derechos fundamentales causa el no reconocimiento de la prestación y la dependencia económica que en vida tuvo del causante, a lo que se suma que luego de su muerte las gestiones para la reclamación de la prestación fueran realizadas de forma diligente y una de ellas recae en la persona del causante y debe ser demostrada por el solicitante y es la consistente en demostrar cuales fueron las condiciones por las cuales el afiliado estuvo en imposibilidad de cotizar las semanas necesarias para dejar causada la pensión.

Expresadas estas condiciones, esta Sala debe indicar que sigue el precedente desarrollado en la sentencia SU-005-2018, bajo el entendido de que su aplicación es apenas excepcional y se justifica en aquellos casos en que se supere el test de procedencia, como medida para la protección de personas que dada su condición de vulnerabilidad desarrollo fines del Estado de Derecho como el de la igualdad real y material consagrado en el artículo 13 de la Carta Fundamental, por lo que en este sentido es clara su diferencia con los argumentos sostenidos por el juez a-quo.

Del cumplimiento de los requisitos del Test de procedencia de la sentencia SU-005-2018

En lo que respecta el caso de autos, se destaca que la demanda fue presentada el 26 de febrero de 2021 (02) y desde el petitum, es evidente que se estructuró sobre la base de demostrar que la señora **María Otilia Castro Zapata** cumple con las condiciones de procedibilidad establecidas en la sentencia SU-005-2018, para que por excepción se le permita al aplicación de la condición más beneficiosa teniendo en cuenta la satisfacción de las condiciones establecidas en el artículo 049 de 1990 para acceder a la pensión de sobrevivientes.

En ese norte, pasemos a determinar si se cumplen las condiciones de procedencia y en caso afirmativo establecer si se acreditan los requisitos de cotizaciones establecido en el Acuerdo 049 de 1990, para dejar causada la pensión de sobrevivientes.

Primera condición: Pertenencia a un grupo de especial condición o exposición a varios supuestos de riesgo.

En lo que refiere a este primer aspecto no se evidencia que la señora **María Otilia Castro Zapata** pertenezca a un grupo de especial protección constitucional, no obstante, si se demuestra que se encuentra expuesta varios supuestos de riesgo, toda vez que, para el **11 de abril de 2016** (03/pág.17) cuando falleció su cónyuge contaba con 62 años de edad¹, se encontraba encuestada en el SISBEN III con un puntaje de 30,63 (03/pág.24) y conforme con lo informado por los testigos **Reinaldo Antonio Zapata Castro, José Adam Arboleda Carmona** y **Mario de Jesús Arboleda Hoyos**, sus condiciones económicas para la fecha de la muerte de su cónyuge y aún en la actualidad son precarias, pues se dedica a realizar la venta de fritos los fines de semana para la satisfacción de sus necesidades básicas, por lo que a juicio de la Sala se advierten condiciones de vejez y de pobreza extrema, cumpliéndose con esta primera exigencia.

Segunda condición: Afectación directa de derechos fundamentales.

En lo que toca con la afectación de los derechos fundamentales de la señora **María Otilia Castro Zapata** se advierte conforme con los testimonios de **Reinaldo Antonio Zapata Castro, José Adam Arboleda Carmona** y **Mario de Jesús Arboleda Hoyos**, que la demandante en la actualidad debe trabajar en la elaboración de comidas para la venta, sin que cuente con ingresos o renta fija mensual que le permita satisfacer sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.

Tercera condición: la dependencia económica respecto del causante.

Referente a esta condición, donde de nuevo lo informado por los testigos es relevante para establecer su cumplimiento, debe decirse que los señores **Reinaldo Antonio Zapata Castro, José Adam Arboleda Carmona** y **Mario de Jesús Arboleda Hoyos** al narrar los hechos relatan con seguridad y claridad, informan que el señor **Daniel Cardona Castro** en sus últimos años de vida no trabajó debido a que era alcohólico, y que por lo tanto no colaboró en el sostenimiento de hogar, cuya carga económica asumió la demandante.

A la pregunta desde que momento dejó de colaborar el señor **Daniel Cardona Castro**, los testigos **Reinaldo Antonio Zapata Castro** y **José Adam**

¹ Nació el **5 de noviembre de 1953** (03/pág.19).

Arboleda Carmona, quienes demuestran mayor cercanía con la familia, sitúan el hecho, en el momento desde la cual el causante dejó de trabajar, lo que corroborado con la historia laboral del causante, da cuenta del mes de junio de 1998 (03/pág.29), esto es, casi 18 años antes de su fallecimiento, lo que deja ver con claridad que no pudo existir dependencia económica de la demandante respecto del causante, puesto que no se da cuenta de que este desempeñara alguna actividad económica para el sostenimiento del hogar común.

En ese horizonte, advierte la Sala que no se cumplen con la condición exigida, como quiera, que contrario a demostrarse la existencia de una dependencia económica de la demandante frente al causante, se probó que este no realizaba aportes al hogar común, y que era la hoy demandante la que asumió esa carga, amén de que el causante por su alcoholismo se marginó del mercado laboral.

A partir de lo anterior, y como quiera que para el momento de la muerte del causante no existían en el hogar conformado por el señor **Daniel Cardona Castro** y **María Otilia Castro Zapata** unas condiciones de vida que se vieran alteradas por la muerte del causante como quiera que este no realizaba una labor productiva y no aportaba al sostenimiento del hogar, no aparece para la Sala el elemento de la alteración de las condiciones de vida que se predica de la dependencia económica y en ese sentido no se tiene por cumplida la condición número tres necesaria para la procedencia de la aplicación del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU-005 de 2018, lo que releva a la Sala del estudio de las condiciones 4 y 5 como quiera que según el precedente constitucional debe existir la convergencia de las 5 condiciones.

Lo expuesto significa, que, la norma aplicable al caso de autos sea el artículo 12 de la Ley 797 de 1993, que exige para dejar causada la pensión de sobrevivientes que el afiliado haya cotizado por lo menos 50 semanas en los últimos 3 años anteriores a la muerte, siendo evidente que el señor **Daniel Cardona Castro** ningún aporte realizó en ese periodo y dado que no le es aplicable la condición más beneficiosa pues su muerte ocurrió el **11 de abril de 2016²**, es claro que no dejó causada la pensión de sobrevivientes que se reclama, por lo que aunque por razones diferentes a las expuestas por el a-quo se **confirmará** la decisión apelada.

²Según la actual línea jurisprudencial de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expuesta en la sentencia SL-4881-2020, reiterada en la sentencia SL-1021-2022, solo es aplicable la condición más beneficiosa en la transición entre la ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, a las personas que cuya muerte hubiese ocurrido entre el 29 de enero de 2003 y el 29 de enero de 2006.

Radicado: 05001-31-05-014-2021-00081-01
Radicado Interno: P0992222
Asunto: Confirma sentencia

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, aunque por razones diferentes, la providencia de primera instancia dictada por el Juez Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día del **18 de abril de 2022**, en el proceso ordinario adelantado por la señora **MARÍA OTILIA CASTRO ZAPATA** contra **COLPENSIONES**.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS


CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA


GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ


HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

Radicado: 05001-31-05-014-2021-00081-01
Radicado Interno: P0992222
Asunto: Confirma sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	María Otilia Castro Zapata
Demandado	Colpensiones
Radicado	05001-31-05-014-2021-00081-01
Decisión	Confirma sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 29 de julio de 2022 a las 8:00am

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 29 de julio de 2022 a las 5:00pm